

Respuesta al Juez Oziel Francisco de Sousa, que decidió la invasión de Cipla por 150 policías armados con objeto de cerrarla.

Día 31 de mayo, a las 07:00hs de la mañana, 150 policías armados hasta los dientes invadieron Cipla, fábrica controlada por los trabajadores, e “instalaron” un interventor nombrado por un juez federal a petición del INSS (Seguridad Social). La dirección elegida por los trabajadores y otros trabajadores escogidos a dedo fueron expulsados o se les impidió la entrada. El terror armado se impone en la fábrica. Una de las primeras medidas del interventor fue cubrir con una lona negra la enorme placa a la entrada de la fábrica que decía: “CIPLA, empresa controlada por los trabajadores”. Una extraordinaria campaña nacional e internacional exigiendo el fin de la intervención en Cipla se desarrolló desde pocas horas después de la operación de guerra llevada a cabo por la Policía Federal. Empezaron a llegar mensajes al Gobierno Lula y sus Ministros: al de Justicia, Tarso Genro, responsable de la Policía Federal, a Luis Marinho, de la Seguridad Social, de cuyo ministerio salió la petición de intervención de Cipla, así como al Ministro de Trabajo y Empleo, Carlos Lupi. La reacción inmediata y tan fuerte nos dio aliento y fuerza

para organizar la resistencia contra este hecho absurdo. Horas después de la invasión, el día 31/05/07, en contacto con el Ministro de Trabajo, Carlos Lupi, nos comunicaba su posición contraria a la intervención y que su ministerio trabajaría para que la policía fuera retirada y el INSS retirase la petición de intervención. Hoy, 05/06/07, aún no ha habido ninguna actitud concreta del Gobierno Lula para que esto suceda y la intervención continúa, ahora con decenas de hombres armados contratados controlándolo todo dentro de la fábrica.

Se estableció un clima de terror. Y como en los tiempos de la dictadura, se elaboró una "lista negra"; desencadenando una persecución política contra los principales activistas. Todo ello con la presencia y apoyo activo del presidente/gangster del sindicato de plásticos de Joinville, que abandonó la CUT y es conocido como agente patronal

y enemigo de la ocupación de fábricas desde hace años. Este falso sindicalista se dedicó a la caza de activistas dentro de la fábrica junto a la policía ayudando a elaborar la "lista negra".

Ahora, se lleva a cabo una campaña infame de calumnias contra los miembros de la Comisión de Fábrica por parte del interventor y sus subordinados para desmoralizar e impedir la resistencia. El interventor pidió al juez procesar a más de 40 trabajadores por "formación de cuadrilla", "impedir el cumplimiento de la orden judicial", "perturbación del orden y la paz social", entre otras barbaridades. Y el juez lo

admitió a trámite en la ola imperante hoy en Brasil de criminalizar los movimientos sociales.

Pero, menos de 24 horas después de la invasión, un pleno con más de 100 asistentes constituyó un Comité por el Fin de la Intervención en CIPLA formado por la CUT (Central Única de Trabajadores), MST (Movimiento Sin Tierra), CDH (Centro de Derechos Humanos), diputados, concejales, partidos y decenas de asociaciones y organizaciones políticas y populares. El MST, aliado hace largo tiempo, nos invitó a hablar en su Congreso

Nacional que reunirá más de 16.000 delegados del 12 al 15 de junio en Brasilia. La CUT publica nuestros comunicados en su web. La Confederación Nacional de Química (CNQ) de la CUT, que reúne los sectores plásticos, petrolero, químicos, papel, goma, etc., ya nos invitó a hablar en su congreso garantizando su apoyo. Diputados federales se pronuncian. Fábricas recuperadas por trabajadores nos llaman y organizan la campaña en Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países.

La campaña de apoyo se ha extendido por el mundo con presión sobre las Embajadas en numerosos países (esto es muy importante) y con miles de mensajes a los ministros del Gobierno Lula y al juez federal responsable de la intervención policial/militar en Cipla.

La solidaridad que recibimos de la población de Joinville es también impresionante y reconfortante. En este

momento estamos preparando un Acto Nacional frente a Cipla el 13/06/07 exigiendo el fin de la intervención. También se preparan actos en diversos países frente a las embajadas brasileñas el 12/06/07.

Contra esta inmensa campaña, el juez Oziel ha emitido una respuesta automática en su correo

electrónico intentando
justificar sus actos
injustificables.

El objetivo de esta
intervención
judicial/policial/militar es
cerrar Cipla y liquidar el
movimiento nacional de
fábricas ocupadas que
está tan unido a todo el
movimiento de la clase
trabajadora. Nuestra

reivindicación central
siempre fue
"Nacionalización de
las Fábricas
Ocupadas" (función
pública y social de las
fábricas) con control
democrático de los
trabajadores. Pero, para
los patronos y sus
lacayos es insoportable
la demostración práctica

de que los capitalistas son innecesarios y que los trabajadores pueden administrar y controlar las fábricas sin estos parásitos. ¡¿Si pueden hacer esto en las fábricas por qué no en toda la sociedad?!

Es para acabar con esto por lo que han intervenido. Como dice

el juez Oziel en su
decisión:
"Quinto, y tal
vez el más importante
reflejo negativo del
coste social de la
actitud de la
ejecutada (Cipla): al
acogerse al
argumento de que se

puede hacer todo
para mantener mil
puestos de trabajo,
**se está legitimando
la odiosa falta de
respeto a las leyes y
tirando por tierra al
Estado Democrático
de Derecho.**
¿Imaginese si se

pone de moda?

".

**Desde nuestro punto
de vista, lo que es
odioso es no
respetar a los
trabajadores y
tratarlos como
esclavos del capital.
Odioso es ver**

hombres y mujeres
humillados por la
fuerza de los
intereses de los
poderosos de la
clase dominante.
Odioso es ver gente
trabajadora
desesperada por no
tener cómo alimentar

a su familia mientras
los ricos se hacen
más ricos. Odioso es
ver a los jueces y a
otros actuando al
servicio de las
clases propietarias y
usando todas las
fuerzas
policiales/militares

de que pueden
disponer para invadir
una fábrica y
aterrorizar a los
trabajadores y
trabajadoras.

Por eso más abajo
respondemos a
esta odiosa
respuesta

automática del
correo electrónico
del juez Oziel.

Tampoco es
posible olvidar que
la petición de
intervención fue
realizada por el
INSS, Ministerio de

la Seguridad Social
del gobierno Lula,
que nosotros y
todos los
trabajadores de
Cipla ayudamos a
elegir dos veces.
Eso también es
odioso e indigno.

Sobre las calumnias transformadas en decisión judicial con el objetivo de cerrar Cipla

El 31 de mayo de
2007, en Joinville,
estado de Santa

Catarina, Cipla,
pionera y la
mayor empresa
del movimiento
de fábricas
ocupadas, fue
invadida por
decisión de la

Justicia Federal, y
150 hombres
armados
impusieron la
intervención
judicial de la
empresa.
Como se sabe,

desde octubre
de 2002 los
trabajadores de
Cipla ocuparon y
asumieron la
gestión de la
empresa, como
única forma de

garantizar los
puestos de
trabajo de
manera duradera
y para efectuar
los pagos de los
derechos
debidos.

Desde
entonces, el
movimiento de
las Fábricas
Ocupadas,
especialmente
Cipla, sufre
diariamente las

amenazas de
cierre de la
empresa, que
dejaría
desempleados a
sus 800
trabajadores.
Tales

amenazas,
como embargo
de la facturación
y presiones
sobre la Comité
de Fábrica,
suceden porque
los antiguos

propietarios
durante más de
15 años no
pagaron
impuestos,
derechos
laborales,
cargas sociales,

proveedores,
etc. Este pasivo
pasa de los 600
millones de
reales y con
intereses y
multas puede
ascender a

1.000 millones
de reales (500
millones de
dólares
americanos).
Este pasivo
está en su

práctica
totalidad con la
Unión y el
Estado,
haciendo
necesaria sin
duda la

negociación y
la prevalencia
del buen
sentido, con
objeto de
mantener la
fábrica abierta

garantizando
sus casi mil
empleos.

**Inclusive para
que un día el
Estado pueda
recibir parte**

**de lo que
nunca reclamó
durante casi
dos décadas a
sus
ex-propietario
s**

■

Cuando fue
ocupada, Cipla
estaba
quebrada y en
proceso de
cierre. Esto es

de
conocimiento
público y de
las autoridades
que firmaron el
Acuerdo
Laboral

entregando el
control a los
trabajadores.
Nos ofrecieron
las acciones
de la empresa
y rehusamos.

Somos
trabajadores y
hermanos de
toda nuestra
clase, y no
propietarios de
una empresa

quebrada.

Sin capital, sin
ayuda del
gobierno,
arrancamos
casi desde
cero y

llegamos hoy
a una
facturación en
Cipla de más
de 3 millones
mensuales de
reales

(US\$1,5
millones). Con
ello
conseguimos
pagar los
salarios,
comprar

materia prima
y rescatar
más del 90%
de los salarios
atrasados e
impagados
por los

ex-patronos.
Además,
llegamos a un
acuerdo con
la justicia
laboral y ya

pagamos la
deuda con
antiguos
trabajadores
dejada por los
ex-patronos,

cerca de 2
millones de
reales.

Depositamos
la parte del
trabajador del

INSS y del
Impuesto de
la Renta,
declarando la
imposibilidad
de depositar

la parte
empresarial.
Esto siempre
lo hicimos
público y lo
comunicamos

a los
ministros de
la Seguridad
Social, de
Trabajo, de
Hacienda e

incluso al
presidente de
la República,
Luis Inácio
Lula da Silva,
en más de

una ocasión
desde 2003.
Desde la
ocupación
intentamos
un acuerdo

con el INSS
sobre la
deuda dejada
por los
ex-patronos
pero siempre

encontramos
un rechazo
injustificado e
inexplicable.
Y que ahora
se entiende.

Los actuales
dirigentes del
INSS no
tienen interés
en cobrar la
deuda, pero

sí en cerrar
la fábrica y
liquidar el
movimiento
político de
las fábricas

ocupadas,
pues todos
saben que la
venta de todo
el patrimonio
de la

empresa no
llega al 10%
de la deuda.
Por ello, una
Comisión
creada por la

Presidencia de la República con técnicos del BNDES, BRDE y

BADESC
(bancos
estatales de
desarrollo)
llegó a la
conclusión

de que:
"Las
empresas
[Cipla e
Interfibra,
nota mía -

SG] son
viabiles y
están muy
bien
administrad
as. El

problema es
el pasivo
impagable...
La solución
recomendada
a para

salvar estos
mil empleos
es que su
pasivo, casi
todo con el
gobierno

federal y
estatal, se
transforme
en acciones
asumidas
por el

BNDES,
BRDE y
BADESC,
resolviendo
así este
problema

social y
viabilizando
estas
empresas&q
uot;.
(Informe

dirigido al
Presidente
de la
República
por el
Superintend

ente del
BRDE en
nombre de
la
Comisión).
En 2004,

conseguimo
s establecer
el sábado
libre,
reduciendo

la jornada de trabajo a 40 horas semanales, y en

diciembre
de 2006
redujimos la
jornada a
30 horas

semanales.

Todo ello

sin

reducción

salarial y

sin
disminuir la
facturación.
Todas las
principales

decisiones
se toman
en
asambleas
y la fábrica

es
administrad
a por una
Comisión y
un

Consejo, elegidos por los trabajadore s. Las

decisiones
administrati
vas y
financieras
se toman

diariamente
por un
Comité
Administrati
vo y

Financiero
(CAF), de
unos 10
miembros,
designado

por este
Consejo.
Los
diferentes
turnos de

trabajo
eligen
representa
ntes que
participan

en el CAF.
Estas
elecciones
son
anuales,

siempre en
el mes en
que se
ocupó la
fábrica, y

todos votan
nombres o
listas,
según
decisión de

la
Asamblea
Soberana.
Y ahora el
Estado,

mediante
el INSS
(Poder
Ejecutivo)
pide una

intervención
a través
de la
Justicia
Federal.

Estas son
las
instituciones
que
durante

tantos
años
negligente
mente no
actuaron,

controlaron
ni
penalizaro
n a los
responsabl

es de más
de 20 años
de fraude
fiscal, los
cuales se

apropiaron
indebidam
ente de las
prestacion
es sociales

y continúan
impunes y
millonarios.

La

"Justi
cia"
hasta
ahora no
busca los

bienes
personales
de los
ex-patrono
s. El Juez

Oziel sabe
que podría
llegar a los
bienes
personales

de los
socios,
mediante
la
responsabi

lidad
solidaria.
Sin
embargo,
se percibe

que tal
prerrogativ
a legal no
le interesa.

El Juez
Oziel no
hace
"Just
icia"

sino el
papel de
patrón,
poniendo
el valor de

la
propiedad
privada
por
encima de

cualquier
otro valor
social, y
alega
estar

respetand
o el
"Est
ado
Democráti

co de
Derecho &
quot;.
Reproduzc
o una

parte del
mensaje
enviado
desde São
Paulo a

los
ministros y
al
presidente
por un

conocido
intelectual:

"...L
a acción

judicial y
policial no
es sólo
injusta y
moralmen

te

insostenible:

es

también

ilegal. La

Constitución brasileña protege la propiedad

privada,
pero
destaca
que esa
propiedad

*sólo se
legítima al
ejercer
una
función*

social
.
En
manos de
los
antiguos

propietari
os, Cipla
e
Interfibra
cumplían

funciones
antisocial
es, pues
servían de
instrument

o para los
crímenes
de sus
dirigentes,
haciendo

inviabile el
continuar
generand
o riqueza
y

empleos.
Bajo
control de
los
trabajador

es, Cipla
e
Interfibra
cumplen
funciones

sociales
insustituibl
es en el
contexto
de la

ciudad de
Joinville&
quot;.
Después
el juez

dice que:
"...p
uede
defenders

e que la
sociedad
brasileña,
en

general, y
la
joinvillens
e en

particular,
no
pueden
ser

obligadas
a
soportar
este alto

coste
social,
basado
única y

exclusiva
mente en
los
argument

os del
comité de
trabajado
res,

desprovis
to de
cualquier
base

empírica,
de que no
hay otra
solución

para la
salvaguardar
dia de
estos

empleos
que no
sea la
estafa

general del impago de los

tributos&

quot;.

¡¿Estafa?

!EI

deseo de
los
trabajado
res es

honorar
todos los
pagos
debidos,

siempre
dentro de
la
realidad

de la
empresa,
y que se
busquen

los
bienes
personal
es de los

antiguos
administr
adores,
los

verdader
os
estafador
es. Es

imposible
cumplir
con todos
los pagos

de una
empresa
quebrada

■

¿Coste
social?

¿Qué
entiende

el juez
por ello?
"U
no, el

precio
por esos
mil
puestos

de
trabajo
es, en
última

instancia

, la

exención

total,

amplia y
sin
restriccio
nes del

pago de las obligacio nes

tributaria s y cargas sociales

de la
empresa
, lo que
no

puede
ser
tolerado
por una

sociedad
honestas,
cuyos
miembros

s pagan
al día
sus
impuesto

s y
contribuc
iones & q
uot;.

Pero,
¿de qué
exención
habla

este
juez?
Nosotros
recogem

os todo
lo que
podemo
s y

cumplim
os los
acuerdo
s hechos

con la
justicia
laboral,
con

Haciend
a y con
el
gobierno

estatal.
¿Y qué
impuest
os

ayudará
a
recaudar
el cierre

de la
empresa
?

Y el juez

prosigue
su
delirio:
"D

os, al
dejar de
recoger
para los

fondos
públicos
los
millones

de
reales
que
debe en

impuest
os
federales,
la

ejecutad
a y las
empres
as del

Grupo
impiden
que
estos

recursos
vuelvan
en
forma

de
servicio
s y
benefici

os
esencial
es a la
comunidad

ad
joinvillen
se. De
hecho,

es con
el recibo
de
ingresos

tributari
os que
el
Estado

cumple
su
función
de

garantizar
los
derechos
más

básicos
de los
ciudadada
nos.

Como el dinero del Grupo

Ci
pla no
entra en
la
cuenta

de la
Unión,
los
ciudadada

nos de
Joinville,
indirecta
mente,

sufren,
en la
exacta
medida

en que
tienen
aún más
reducida

s sus
oportunidades
de

obtener
mayores
inversio
nes en

la red pública de enseñan

za o de
incremente
ntar el
número

de
camas
ofrecida
s por la

red de
salud
pública,
por

ejemplo.
Basta
conectar
la

televisió

n y

sintoniz

ar las

noticias
de
mediodí
a para

ver

cómo la

comunidad

ad de

Joinville
carece
de
inversio

nes en
el área
de
salud.

Faltan
ambulan
cias,
camas

en los
hospita
es,
medicin

as,

médicos

..."

Entonces,
¿Cipla y
sus

trabajad
ores
son
respons

ables
del caos
en
Salud,

Educaci
ón y
Viviend
a que

asola
este
país?
¿Por

qué el
juez no
habla
de los

millones
destina
dos a
los

sectore
s
sociales
que el

Presup
uesto
Federal
desvia

a los
banquero
os,
multina

cionales
y
terrateni
entes?!

¿Por
qué no
habla

de sus
amigos
patrone

s que
deben
millone

s a la
segurid
ad

social y
siguen
suelto,

ricos y
bebiend
o

whisky
escocés,
vino

francés,

y

viajand

o en jet
privado
s?!

Los propios trabaja

dores
son los
que

siempre
e
denunci

aron el desvío de

impuest os, práctica

rutinari
a en el
medio

empres
arial
brasileñ

O. Los trabaja dores

siempre
e
defendi

eron
que los
tributos

deben
pagars
e para

invertir
e en
atender

las reivindi- caciones

S

popular

es más

sentida

S.

Los

trabaja
dores
de las

fábrica

s

ocupad

as no
tienen
exencio

nes
fiscales
, como

tantas
otras
empres

as que
así
defraud

an y/o

reciben

recurso

S
público
s. Esta

falsa e
hipócrit
a

argume ntación del juez

no se
sostien
e.

Y el
juez
prosigu

e:

"

Cuatro,

es

incalculable

el

coste
social
genera

do por
la
compet

encia
desleal
Como

no

paga

ningún

tributo,
la
ejecuta

da
consig
ue

colocar
sus
produc

tos en
el
merca

do a
un
precio

infinita
mente
menor,

perjudi
cando
a las

sociedad
empresariales

sariale
s que
cumple

n sus
obligac
iones

sociale

S.

Estas,

sin la
ilegal y
desleal

competencia
de

Cipla,
podría
n

ciertam
ente
crecer

hasta
conseguir

absorb
er, con
holgura

a, los
mil
puesto

s de
trabajo
de que

tanto

se

vanagl

oria la
deudor
a"

■

;

El juez
habla

de
"
compe

tencia

desleal

".

¿De
qué
habla,

sin
ningún
conoci

mimiento
de
causa?

Nuestr as

tablas de precio

s son
pública
s y

compit
en,
perdie

ando la
mayorí
a de

las
veces,
con las

compe
tidoras
.
Estas

sí,
gigant
es

multin acional es

como la TIGRE

(1.300
millone
s de

reales
el año
pasad

o), la
AMAN
CO,

suiiza y
la
mayor

del
sector
en el

mundo
, entre
otras.

Y es
absurd
o decir

que
sin
Cipla

estas
empres
sas

creceré
an y
contrat

arían a
los mil
trabaja

dores.

Es

ridículo

O.

Finalm

ente,

el juez
deja
salir

su
visión
conser

vadora

,

reacci

onaria
y
crimin

al y
muestr
a la

ideolo
gía
que le

orienta

■

■

"

Quinto
, y tal
vez el

*más
import
ante*

*reflejo
negati
vo del*

*coste
social
de la*

*actitud
de la
ejecut*

*ada: al
acoger
se al*

argum
ento
de que

*se
puede
hacer*

*todo
para
mante*

*ner mil
puesto
s de*

trabajo

,

se

***está
legiti
mand***

o la
odios
a falta

de
respect
o a

***las
leyes
y***

tirand

o por

tierra

al

Estad

O

***Demo
crático
o de***

***Derec
ho.
¿Imag***

inese
si se
pone

de

moda

?

"

■

El juez

sabe
de lo
que

habla
cuand
o dice:

"
Imagin
ese si

se
pone
de

moda
"
.

juez
entien
de

que
"
e/

reflejo

negati

vo de

la
actitud
de la

ejecut
ada
";

es el
ejempl
o

práctic
o que
Cipla

da a
toda la
clase

trabaj
adora.
Este

es el
gran
proble

ma.

Cipla

es un

ejempl
o de
lucha

y

conqui

sta de

los
trabaj
adores

s, que
asumi
eron

el
contro
ly la

admini
stració
n de

una
empre
sa

compl
etame
nte en

quiebr
a y
mejor

aron
las
condic

■ iones de trabaj

o y de

vida.

Juntar

on el
coraje
y

adquirir

ieron

la

conciencia
neces

aria
para
ocupa

ry

recup

erar la

producción,
invierte

ando el
contro
l de

los
medio
s de

producción,
“

echan
do a
patad

as & qu

ot; a

los

patron
os
que

había

n

perjud

icado
a la
sociedad

ad y a
todos
los

trabaj
adores
s de

Ci
pi
la

dur
ant

e m
ás

de 20

años.

Y el

juez
que
habla

de
"
Estad

O

Demo

crático

o de
Derec
ho & qu

ot;
envía
tropas

a

petició

n del

INSS
(el
gobier

no,
por lo
tanto)

e

impla

nta el

terror.

Su

objeti
vo es
cerrar

Ci
pi
la

y
ello

está

claro
en la
decisi

ón del
juez
Oziel:

"

;En

otras

palabras,
tal vez el

mo-
me-
nto
sea

propic

io

para

que la
socie
dad

joinvill

ense

haga

la
siguie
nte

reflexi

ón:

¿real

mente
el
mante

nimie
nto
del

Grupo Cipla, en

estas
condi
cione

S,

gener

a, de

hecho
, un
bien

para
la
socie

dad?

¿No

será

que,
en
estos

términ
os,
su

existe

ncia

no

*sería
más
un*

mal

que

un

bien
social
, ya

que
benefi
cia a

unos
pocos
en

detrim
ento
de la

mayor
ía? & q
uot;.

Si
Cipla
es un

mal,
enton
ces

hay
que
extirp

arlo.

Y por

el

terror
arma
do.

Nada
más
claro.

Y

para

ello el
juez

prepa

ró

una
consp

iració

n

judici
al/poli

cial

en

secret

O,

desde
el 21

de
mayo,

fecha
en

que
firmó

la
"

¡Deci sión

Judici al & qu

ot;. Y
duran

te

diez

días organ

■
izó y
reuni
■

ó
tropa

S
feder

ales
para

realiz
ar la

"

;oper

ación
"

Y el
juez

hace
todo

eso

asumi

endo
hipócr

itame
nte

todas
las

calum
nias

del gángrs

ter

político

O

conoc

ido
como

presid
ente

del
sindic

ato
del

plásti

co,

aún
habie

ndo
sido

recha
zadas

estas
calum

■
nias

en la

justici
a

tenien
do el

traido
r diez

proce
sos

nuest
ros

abiert
os

por
difam

ación

y

calum
nias.

El
juez

basa

su

decisi
ón en

calum
nias y

difam
acion

es

absur

das
para

justifi

car su

posición

real:

la

defen
sa de

los
patro

nos y
el

objeti
vo de

cerrar
las

fábricas

ocupadas.

Por
ello

esta
mos

toma
ndo,

además

de

la

movili

zació
n y la

camp
año

nacio
nal e

intern acion

al,
todas

las
medi

das
judici

ales

exigie

ndo

la

■
inme
diata

revocación

de la
interv

enció

n en

Cipla y la

vuelta de la

direcc
ión

de la
fábric

a

elegid

a por

los

trabaj
adores

S.

Esta

mos
tambi

én
funda

ment

alme

nte
pidie

ndo

al

Presi dente

Lula
y al

Minist ro

Luis

Marin

ho,
de la

Segu ridad

Socia

I, que

deter
mine

la

retira

da

■
inme

diata
de la

petici
ón de

■
interv

enció
■

n

hech

a por
el

INSS.

Esperamos

abrir

así

una
nuev

a

etapa

de

negro

ciació

n

para

reest

ablec

er las

propu

estas

y

acuer

dos,

no

sólo

con

el
INSS

■
sino

con

los
demá

S

acree

dores

,

debie

ndo

asum

ir el

Estado o su

parte
de

respo
nsabil

idad

en

todos

los

aspe
ctos.

No
tenngá

is
duda

s de
que

llevar
emos

la

resist

encia
y la

lucha
hasta

el
final

de
nuest

ras
fuerz

as. ■

Se

trata
de la

clase trabaj

adora
y de

su
derec

ho

in alie

noble

a

lucha

r por

el
empl

eo y

una

vida
digna



Nues

tra

conc

epció

n es

social ista y

los social

istas

no

tiene
n el

derec
ho de

ab
an

do
nar

la

lucha

para
arran

car a

la

clase trabaj

adora
de

este
mund

o de

la

opres
ión y

la

explo

tació

n.

iViva
la

lucha de la

clase trabaj

ador

a en

brasil
y el

mund
o

enter

o!

iViva
la

lucha de

las

Fábrica

cas

Ocup

adas

por

un
futur

O

para

la

hum

anida

d!

Joinville, 5

de
junio

de

2007

Serg

e

Goul

art

Coor

dina
dor

(de
Cipla

) de

los

Cons
ejos

de

Fábrica

cas

Ocup

adadas

y en

Luch
a

(Bras
il)

serg

egou

lart

@ter

ra.co

m.br

This
e-ma

il

addr

ess

is

bein

g

prote
cted

from

spa

m

bots,

you

need

Java Scrip

t

en ab

led

to

view

it

Teλέf

ono: ■
■

+55

47

99

63

3015